

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto

Prof. Titular de Universidad de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de León

1. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE TERZA QUATER, SENTENZA N. 7076/2009

Las organizaciones *Consulta Romana por la Laicidad de las Instituciones*, varias asociaciones pro laicidad, algunas confesiones minoritarias -con y sin acuerdos con el Estado- y varios alumnos que no habían elegido ni religión católica ni otras enseñanzas alternativas a la clase de religión, demandan la nulidad de la ordenes relativas a la atribución de créditos en el curso escolar anterior a la realización del “examen de madurez” en tanto determinan 1) que los docentes de religión –ya sea la católica o las otras previstas- participarán como cualquier profesor de otra enseñanza en las deliberaciones relativas a sus alumnos; 2) que la atribución de calificaciones tenga en cuenta el rendimiento y grado de interés con que han seguido las clases de religión, o las clases y actividades alternativas, los respectivos alumnos; 3) particulares requisitos para la apreciación del valor formativo de las actividades desarrolladas fuera de la escuela al margen de aquellas previstas alternativamente por cada centro.

El TAR da parcialmente la razón a los demandantes: Ni la enseñanza de religión puede tener el mismo valor que el resto de asignaturas curriculares ni los enseñantes de religión católica pueden participar enteramente en las reuniones del claustro de

profesores que tienen como objeto la evaluación global de los alumnos.

En opinión del Tribunal, el valor que ha de reconocerse a la doctrina religiosa que forma parte de esas enseñanzas determina la particularidad de las mismas frente al resto y, a su vez, exige del Estado una conducta especialmente respetuosa con la neutralidad que está obligado a garantizar en cuestiones tocantes a la libertad de conciencia de sus ciudadanos.

A este respecto, se afirma (Fundamento de Derecho Quinto) que:

“El principio de laicidad del Estado, aunque no esté definido en norma alguna, ha sido claramente enunciado por la Corte Constitucional bajo la amplia acepción de ‘garantía del Estado para la salvaguarda de la libertad de religión, en el marco del pluralismo confesional y cultural’, con respecto al cual el Estado se sitúa en condición de ‘neutralidad’ (cfr. Sentencia n.º 203, de 12 de abril de 1989). Los principios de la Carta Constitucional, por tanto, muestran un Estado que, con respecto a la religión, no se posiciona de forma hostil ‘sino que se pone al servicio de las particulares pretensiones de la conciencia civil y religiosa de los ciudadanos’ (Sentencia n.º 203 citada).

En el caso concreto del pronunciamiento que acaba de ser recordado, se afirma que la enseñanza de la religión católica conecta con un derecho de libertad constitucional “que no es reducible, por su seriedad y compromiso en conciencia, a la mera opción entre equivalentes disciplinas escolares”

Desde la consideración de que la religión no es una “materia escolar” como las demás debe ser abordado el juicio acerca de la ilegitimidad de su reconducción al ámbito de las actividades relevantes para la obtención de los créditos de formación.

Y no porque la religión católica no deba ser considerada una materia carente de valores históricos y culturales sino, al

contrario, no puede ser considerada una disciplina escolar normal justamente porque es un enseñanza de gran relevancia moral y ética que, como tal, toca aquello más profundo de la intimidad de la persona que la acepta. (...) Lo religioso concierne a aspectos que implican la dignidad del ser humano (reconocida y declarada inviolable por el artículo 2 de la Constitución) y concierne indistintamente a creyentes y no creyentes, ya sean estos ateos o agnósticos (Cfr. Sent. Corte Cos. N° 334, de 8 de octubre de 1996).

Justamente por esta razón, desde un punto de vista jurídico, una enseñanza de carácter ético y religioso, estrictamente apegado a la fe individual, no puede ser en absoluto objeto de valoración en el marco del grado de aprovechamiento escolar, dado el riesgo de incurrir en juicios de valor determinados por la intensidad de la propia fe”

2. ASUNTO LAUTSI C. ITALIA

En los últimos años, en Italia ha sido debatida en sede judicial la presencia de símbolos cristianos en lugares públicos. En parte, nos hemos hecho eco de las sucesivas decisiones en crónicas anteriores¹. El debate ha ido situándose en torno a la cuestión de la acomodación de los valores cristianos junto a los valores republicanos para, finalmente, irse imponiendo la incompatibilidad de la neutralidad del Estado con la aceptación de la única prevalencia de la simbología religiosa cristiana. Esta es la línea en la que se mueven algunas de las sentencias dictadas en el ámbito interno y también el rumbo trazado por la sentencia

¹ En las crónicas de 2006 y 2007, recogíamos dos episodios judiciales posteriores a la solicitud por el juez Luigi Tosti de la remoción del crucifijo presente en la sala de vistas del Tribunal de Camerino, conflicto que traía causa de una Circular del 29 de mayo de 1926, núm. 2134/1867. En la primera, dábamos cuenta de la Sentencia de la Corte Costituzionale 127/2006, de 24 de marzo; en la segunda, Decisión de 23 de noviembre de 2006 del Consejo Superior de la Magistratura. Con anterioridad y más precisamente en el ámbito de la escuela, habíamos comentado la decisión del Tribunal de L'Aquila de 23 de octubre de 2003, en el caso *Smith c. Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena*.

del TEDH que incorporamos como anexo, donde se termina por afirmar que:

“El Estado tiene la obligación de asumir una neutralidad confesional en el marco de la educación pública donde la presencia en clase está prevista sin acepción de religión y debe buscarse inculcar a los alumnos un pensamiento crítico.

El Tribunal no ve cómo la exposición, en las aulas de las escuelas públicas, de un símbolo que razonablemente se puede asociar al catolicismo (la religión mayoritaria en Italia) podría servir al pluralismo educativo que es esencial para la preservación de una “sociedad democrática” tal y como se concibe en el Convenio. El Tribunal recuerda a este respecto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional camina en el mismo sentido (...).

El Tribunal estima que la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión determinada en el ejercicio de la función pública en relación con unas situaciones particulares que dependen del control gubernamental, en concreto, en las aulas escolares, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones así como el derecho de los niños escolarizados a creer o no creer. El Tribunal considera que esta medida conlleva la violación de estos derechos porque las restricciones son incompatibles con el deber que incumbe al Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación.”²

Frente a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -contra la que el Gobierno italiano ha decidido presentar recurso ante la Gran Sala-, los sectores políticos más radicales, apelando a la visceralidad, han levantado la bandera del símbolo religioso y de la más torpe intolerancia. Quizá la muestra más representativa de lo que queremos decir la aporta la *Ordinanza* nº. 174 de 5 de noviembre de 2009 del *Comune* de

² Números 56 y 57 de la Sentencia de 3 de noviembre de 2009.

Scarlino, donde apelando a la normativa fascista sobre la exposición de crucifijos en lugares públicos leemos:

“Vista la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de noviembre de 2009 que acogiendo el recurso presentado ante ella, en lo sustancial, prohíbe mantener el crucifijo en las aulas de las escuelas de cualquier orden y grado (...)

- Teniendo presente que el crucifijo muestra en Italia, en clave simbólica, el origen religioso de valores civilmente relevantes como la tolerancia, el respeto mutuo, la puesta en valor de la persona, la libertad, la solidaridad y el rechazo de cualquier discriminación.

- Considerando que la exposición del crucifijo en un lugar no religioso no comporta una significación discriminatoria bajo el punto de vista religioso, en tanto que representa valores civilmente relevantes que inspiran nuestro orden constitucional, emanan de las normas fundamentales de la Constitución, son la base de nuestra convivencia civil, delinean la laicidad propia del Estado, al margen de la religión seguida por los alumnos (tal y como ha sido definida en la Sentencia de la Corte constitucional n.º.389 del 13 de diciembre de 2004)

- Visto que el Gobierno ha presentado recurso contra la Sentencia del TEDH de Estrasburgo.

- Teniendo presente que, a la espera del éxito del recurso presentado por el Estado italiano, ha de ser necesario preservar las actuales tradiciones y mantener en las aulas escolares de este municipio la presencia del crucifijo.

Ordena, por los motivos explicitados, y en sintonía con el recurso del Estado italiano, mantener en las aulas escolares de este municipio la presencia del crucifijo (...) como expresión de los valores civiles y culturales fundamentales del Estado italiano, al menos hasta la resolución del recurso por el Tribunal Europeo interpuesto por el Estado italiano (...)

El personal de la Policía Municipal controlará, a partir del séptimo día posterior a esta fecha, la observancia de esta Ordenanza. A quienes incumplan la misma le será aplicada la sanción administrativa de 500 €”³

De mayor calado que cualquiera de estas actuaciones, muy aisladas, es el intento de reformular los valores superiores del Estado italiano al que se dirigen varias proyectos de Ley Constitucional que durante el último año han iniciado su trámite parlamentario:

1) *Proposta di legge costituzionale* a iniciativa de los diputados BIANCOFIORE y 61 diputados más. Al artículo 7 de la Constitución le sería incorporado un nuevo inciso, según el cual: *“La República reconoce los valores histórico culturales y sociales de sus raíces judeo cristianas”⁴*

2) *Proposta di legge costituzionale* a iniciativa de los diputados COTA y 22 diputados más. Al artículo 8 le sería añadido el inciso siguiente: *“La República reconoce su fundamento civil y espiritual en el patrimonio cultural y religioso judeo cristiano”⁵*

3) *Proposta di legge costituzionale* a iniciativa de los diputados MUSSOLINI y 3 más. En este caso se trata de adicionar al final del apartado primero del actual artículo 1 de la Constitución la siguiente frase: *“y reconoce las raíces cristianas como fundamento de la civilización italiana”⁶*.

A diferencia de las tres anteriores, una cuarta pretende reforzar en términos de igualdad el reconocimiento de la libertad

³ El texto completo en www.comune.scarlino.gr.it; en sentido similar, se han anunciado otras mociones en diversos municipios, véase, ad. es., LA REPUBBLICA, Mozione della Lega Nord per mantenimento Crocefisso nelle scuole cittadine, 9 de noviembre de 2009.

⁴ «La Repubblica si riconosce nei valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane».

⁵ «La Repubblica riconosce il proprio fondamento civile e spirituale nel patrimonio culturale e religioso giudaico-cristiano».

⁶ «, e riconosce le radici cristiane come fondamento della civiltà italiana».

religiosa en el texto constitucional. Es la iniciativa de MAURIZIO TURCO y otros cinco diputados que propone la modificación de los artículos 7, 8 y 19 de la Constitución italiana en el sentido siguiente:

- El artículo 7 actual sería sustituido por este otro: *“La República reconoce la libertad religiosa como derecho fundamental de la persona”*⁷

- El artículo 8 actual por este otro literal: *“Todas las confesiones son igualmente libres ante la ley y tienen derecho a organizarse según sus propios estatutos en tanto que no entren en contradicción con los principios fundamentales del ordenamiento constitucional italiano y con los derechos inviolables de la persona”*⁸

- La redacción del artículo 19 actual por: *“Todos tienen derecho a profesar libremente su particular fe religiosa en cualquier forma, individual y colectiva, de hacer propaganda y de ejercitar en privado o en público el culto, siempre que no se trate de ritos contrarios al respeto de los derechos inviolables de la persona”*⁹

⁷ «Art. 7. - La Repubblica riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona»

⁸ «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona»

⁹ «Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona»

III.- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹⁰. FOTOGRAFÍAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, S. BERLUSCONI

La autoridad encargada de velar por la más plena protección de la privacidad se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de las fotografías publicadas por la prensa española e italiana en las que el Premier BERLUSCONI aparece en compañía de invitados suyos en las proximidades o el interior de la mansión Villa Certosa. Para el Garante, que la intromisión en la vida privada del Primer Ministro sea legítima o ilegítima depende, fundamentalmente, de que se haya producido dentro de la propiedad o en sus inmediaciones.

¹⁰ La institución del Garante per la Protezione dei Dati Personali está regulada por los Decretos Legislativos 467/2001 y 196/2003. Se trata de un órgano colegiado independiente, integrado por cuatro miembros elegidos en sede parlamentaria para un mandato de siete años, no renovable.

ANEXO I.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO, SEZIONE TERZA QUATER, SENTENZA N.
7076/2009**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,
Sez.III[^]-quater (...) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(...) Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue:

FATTO

I. Con il primo ricorso di cui in epigrafe, la Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni, altre associazioni laiche e atee,; altre istituzioni cristiane ed alcuni studenti iscritti all'ultimo anno di istruzione superiore che avevano scelto di non avvalersi né della religione cattolica, né di insegnamenti sostitutivi chiedono l'annullamento delle ordinanze relative alla disciplina dell'attribuzione dei crediti scolastici per gli esami di maturità per l'anno scolastico 2006-2007 nella parte in cui si prevede:

-- che i docenti che svolgono insegnamento della religione cattolica partecipino a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento; che analoga posizione completa, sia riconosciuta in sede di attribuzione del credito scolastico ai docenti delle attività didattiche formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime (all'art. 8, punto 13);

-- che l'attribuzione al punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tenga conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 14 comma 2 del d.p.r. 323 del 23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse col quale l'alunno ha seguito

l'insegnamento della religione cattolica ed il profitto che ne ha tratto; ovvero le altre attività, ivi compreso lo studio individuale, che si sia tradotto in un arricchimento culturale disciplinare specifico, purché certificato valutato alla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione medesima;

-- che gli alunni che abbiano scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare alle iniziative formative in ambito scolastico potessero far valere tali attività esclusivamente come crediti formativi soltanto in presenza dei requisiti previsti dal D. M. 49 del 24 febbraio 2000 (art. 8, punto 14).

Le parti ricorrenti, premessa una puntualizzazione dei rispettivi profili di legittimazione direttamente connessi ai loro interessi ovvero collegabili alle rispettive finalità statutarie ed associative, denunciano tre rubriche di gravame. In particolare:

a. Con il primo motivo si assume la violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, dell'articolo 9 della legge n. 121 del 1985; dell'articolo unico del d.p.r. 202 del 1990, dell'articolo 309 del decreto legislativo 297/1994. Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con la lettera c) dell'articolo 9 della legge 121 del 1985, per cui l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non può "dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

b. Con il secondo motivo di gravame si lamenta sotto tre profili l'eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di ragionevolezza e del principio di certezza giuridica, del principio dell'affidamento e del divieto di retroattività degli atti amministrativi in quanto:

-- sono adottati diversi criteri di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico che svantaggiano nel profitto chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica (primo profilo);

-- l'articolo 8, comma 14, della ordinanza impugnata prevede criteri del tutto indeterminati per l'eventuale valutazione, quali crediti formativi, delle attività svolte dagli studenti che non

si siano avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, né di attività sostitutive, e che sono lasciati all'ampia discrezionalità di ciascun istituto scolastico con i rischi di ulteriori discriminazioni (secondo profilo in realtà rubricato al punto 2.1.);

-- irragionevolmente le disposizioni censurate avrebbero preteso, alla fine dell'anno scolastico, di fissare i criteri per la valutazione delle attività che erano già state compiute durante l'anno scolastico passato. Si discriminerebbero così retroattivamente gli studenti che avevano scelto liberamente di non valersi della religione cattolica, non immaginando la penalizzazione conseguente sotto il profilo del merito scolastico. La retroattività cosiddetta impropria (ex Cassazione Sezioni Unite 1 aprile 1993 n. 3888) -- incidendo su di un rapporto in essere in ragione di un fatto passato -- avrebbe alterato la disciplina conosciuta dagli interessati e sulla quale essi facevano legittimo affidamento, in violazione del principio dell'affidamento del cittadino sulla situazione giuridica e sulla certezza del diritto più volte ricordato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza numero 349/1985 (terzo profilo in realtà rubricato al punto 2.2.).

c. In via subordinata i ricorrenti deducono l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge n. 121 del 1985, dell'articolo unico del d.p.r. 202 del 1990 e dell'articolo 309 del decreto legislativo 297/1994 laddove interpretati nel senso del provvedimento impugnato per violazione degli articoli 3,2,7,8 e 21 della Costituzione per l'inaccettabile compressione del principio di parità fra confessioni religiose e del diritto di libera manifestazione del pensiero.

I ricorrenti concludono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ministeriale impugnata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, che con memoria, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse a ricorrere da parte dei ricorrenti. Nel merito la Difesa Erariale ha sottolineato l'infondatezza del gravame richiamando il

precedente della Corte Costituzionale n. 203/2000 e quello del Tar del Lazio (n. 7101/2000); e rilevando altresì che: -- l'ordinanza sarebbe una mera proiezione del precetto di cui all'articolo 11 del d.p.r. n. 323/1998; -- che la religione cattolica, al pari delle altre attività alternative, concorre alla determinazione del credito scolastico necessario, che non è limitato alla considerazione del mero rendimento dell'alunno ma che invece considera la personalità umana nel suo complesso ed in tutte le sue manifestazioni.

Sono intervenuti ad *adjuvandum* con separati atti: il Movimento di cooperazione educativa, la Federazione Nazionale Insegnanti Scuola, l'Unione degli Studenti, il Coordinamento Genitori Democratici e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, rappresentativa della Confessione Ebraica nei rapporti con lo Stato italiano, lamentando che l'attribuzione del credito scolastico condizionerebbe la scelta di avvalersi o meno della religione cattolica, che per tale via non sarebbe così più realmente libera.

L'ordinanza del 23 maggio 2007 n.2408/2007 con cui è stata accolta l'istanza cautelare è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2920 del 12 giugno 2007 in considerazione della ritenuta inconsistenza giuridica del ricorso; della carenza di danno e del difetto di interesse delle parti.

II. Con il secondo ricorso la medesima Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni, i rappresentanti delle altre istituzioni ad associazioni laiche, atee e cristiane ed alcuni studenti iscritti all'ultimo anno di istruzione superiore che avevano scelto di non avvalersi della religione cattolica, né di insegnamenti sostitutivi (tutti meglio indicati in epigrafe) chiedono l'annullamento dell'ordinanza relativa alla disciplina degli esami di maturità per l'anno scolastico 2007-2008 nella parte in cui si riproducono le stesse identiche disposizioni dell'ordinanza dell'anno precedente impugnata con il ricorso che precede.

Il ricorso è affidato alla denuncia di tre motivi di gravame assolutamente identici a quelli del ricorso che precede ed alla cui sommaria esposizione si rinvia.

In questo secondo giudizio si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, i cui scritti difensivi riprendono, in rito e nel merito, le medesime argomentazioni sostanziali già svolte sul precedente gravame.

Si è costituita in giudizio ad opponendum la Conferenza Episcopale Italiana per cui in via preliminare il ricorso sarebbe inammissibile in quanto: - non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio né per le associazioni ricorrenti e neppure per i singoli ricorrenti in quanto l'esame di maturità non avrebbe un carattere comparativo (cfr. TAR Veneto n.1117/2000); non sarebbe stato notificato ad alcun studente che avrebbe scelto la Religione Cattolica, mentre sarebbe stata evocata la Conferenza Episcopale che non avrebbe alcun titolo alla chiamata in giudizio. Né potrebbe ritenersi sussistente alcun effetto discriminatorio nei confronti di coloro, che non avendo usufruito di insegnamenti alternativi, hanno partecipato in misura minore al dialogo educativo. Illegittimamente si riconoscerebbe invece l'arricchimento culturale e disciplinare a chi partecipa alacremente all'insegnamento della religione. La mancata considerazione ai fini del credito formativo violerebbe i diritti degli insegnanti di religione che fanno parte del corpo docente con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti come ricordato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n.390/1999) e che non viene sminuito dalla natura di giudizio motivato.

Nel merito per la Conferenza Episcopale, l'ordinanza impugnata non prevederebbe alcun favoritismo per la religione cattolica, limitandosi a prevedere -- in applicazione del vigente quadro normativo di cui alla legge 100 21/1985, d.p.r. 751/1985 e del d.p.r. 202/1990; ed è il d.p.r. 323/1998 -- che anche la religione cattolica, al pari delle altre attività alternative svolte in luogo della stessa, possa concorrere alla determinazione del

credito scolastico necessario ai fini della determinazione del voto per l'esame finale.

Chiamati all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2008 i ricorsi, uditi i difensori delle rispettive parti, sono stati trattenuti in decisione

DIRITTO

1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe ai sensi dell'art.52 del Regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907 n.642, per gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva.

2. Devono preliminarmente essere esaminate congiuntamente le eccezioni preliminari delle parti resistenti che attengono per la gran parte a profili sostanzialmente coincidenti.

2.1. Come eccepito dalla Difesa Erariale e dal Sindacato Nazionale autonomo degli Insegnanti di Religione, entrambi i gravami sarebbero inammissibili per l'originaria e persistente carenza di interesse dei ricorrenti sia nei sensi evidenziati dal Tar del Lazio con la decisione n. 7101/2000 e sia relativamente ai due alunni, che non avrebbero poi impugnato le operazioni di scrutinio con cui i consigli delle loro rispettive classi, con la partecipazione degli insegnanti di religione e delle discipline alternative, hanno segnato i crediti scolastici degli ultimi due anni.

In particolare la Conferenza episcopale costituitasi sul secondo ricorso riporta le argomentazioni dell'ord. n. 2408/2007 del Consiglio di Stato ed assume che l'atto impugnato non avrebbe attribuito alcuna misura di favore per l'insegnamento della religione cattolica rispetto alle altre attività formative ed alle altre opzioni religiose.

Eccepisce, in via preliminare che: il ricorso sarebbe inammissibile in quanto: - non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio né per le associazioni ricorrenti e neppure per i singoli ricorrenti in quanto, come rilevato, l'esame di maturità non avrebbe un carattere comparativo; non sarebbe stato

notificato ad alcun studente che avrebbe scelto la Religione Cattolica. La evocata Conferenza Episcopale non avrebbe infine avuto alcun titolo alla chiamata in giudizio.

L'eccezione non può essere complessivamente condivisa.

L'interesse concreto perseguito dai ricorrenti attiene alla tutela di valori di contenuto ideale e morale che, come tali, attengono alla personalità dell'essere umano.

Qui è invocata la tutela dei diritti sociali, religiosi e culturali di tutte le varie minoranze, comunque, non cattoliche. I rappresentanti dei Cristiani Evangelici, dei Pentecostali, dei Cristiani Avventisti del 7^o Giorno, dei Cristiani Battisti, dei Valdesi, dei Pentecostali degli Evangelici, dei Luterani, delle Comunità Ebraiche nonché delle associazioni laiche e razionaliste perseguono cioè il riconoscimento di una loro pari dignità culturale e sociale, che assumono violata.

Pertanto non pare che possano sommariamente liquidarsi i ricorrenti come se fossero, sostanzialmente, dei soggetti cerca di una pretestuosa tutela per la loro svogliatezza rispetto ai diligenti alunni che hanno optato per la religione cattolica, ma è manifesto che i ricorrenti sono evidentemente portatori di una differente sensibilità, sia essa religiosa o laica.

L'interesse al ricorso, nel caso in esame, non è quindi un interesse collegato ad un'immediata utilità di carattere strumentale o economico dei ricorrenti e delle altre associazioni religiose e laiche, ma si radica in relazione alla richiesta di tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che – sia pure numericamente minoritari nella nostra società – sono tutelati direttamente dalla Costituzione, e che quindi come tali non possono restare estranei all'alveo della tutela del giudice amministrativo.

Le associazioni sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ovvero

di perseguire il conseguimento di vantaggi, di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (arg. ex Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2007, n. 4692; Consiglio Stato, sez. VI, 01 luglio 2008, n. 3326).

In sostanza nel caso in esame si rinviene:

-) sia la "legitimatío ad causam" in senso stretto, cioè l'astratta riferibilità del rapporto giuridico processuale al soggetto che agisce, ricavata dal processo civile e quindi, la corrispondenza fra l'attore ed il destinatario della sentenza;

-) sia la "legittimazione a ricorrere", cioè l'interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto e quindi al ripristino dello status quo ante, connesso con la diretta lesione alla situazione giuridica sostanziale, qui conseguente al notevole rilievo complessivo dei crediti scolastici sull'importo del voto finale.

Per questo il Collegio non si sente di condividere che "non potrebbe avere tutela di soggetto, che pur avendo conseguito buoni risultati dello studio, ha mostrato scarsa partecipazione al dialogo educativo ovvero non ha avuto assiduità nella frequenza scolastica oppure non ha voluto impegnarsi in esperienze coerenti con il corso di studi frequentato ...fino al punto da disconoscere gli altri vantaggi che l'ordinamento intende loro attribuire" per cui "nessuno può sentirsi pregiudicato per il solo fatto che un altro alunno abbia praticato lo sport e ricevuto credito, altro abbia svolto attività artistiche, altro abbia lavorato percependo una retribuzione" (sempre la n. 7101 cit. dalle parti resistenti).

L'assunto è infatti fondato su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l'insegnamento di una religione, qualunque essa sia, (sia cattolica che di altri culti) possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine.

Qualsiasi religione – per sua natura -- non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa ma attiene all'essere più profondo della

spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti.

Di qui l'interesse dei non credenti, ovvero dei differentemente credenti, ad impugnare gli atti che ritengono violino le loro più profonde convinzioni morali o religiose.

Infine si deve rilevare come i ricorsi risultano comunque ritualmente notificati ad almeno un alunno che aveva optato per l'insegnamento della religione.

2.2. Pur con tutto il rispetto per la differente opinione del Giudice d'appello non si rinviene alcun effetto preclusivo assoluto derivante dal fatto che alcuni ricorrenti (quali ad es. la Tavola Valdese ed il Comitato Torinese per la laicità della Scuola) avessero partecipato al giudizio conclusosi con la predetta decisione passata in giudicato, dato che comunque altre associazioni non erano state parti di quel giudizio.

L'articolo 205,1° comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 prevede il potere di disciplinare anno per anno (evidentemente secondo le indicazioni del Ministro in carica) tali profili. Deve osservarsi in conseguenza che, per una precisa scelta del legislatore, tra le diverse ordinanze non vi è alcun diretto rapporto di continenza o di continuità, ma ciascuna di esse è una autonoma fonte regolatrice rispetto alle precedenti analoghe disposizioni ministeriali.

Come è evidente dal loro stesso oggetto, l'efficacia dispositiva delle ordinanze precedenti era limitata al relativo anno scolastico, analogamente fanno quelle qui impuginate. Perciò nessuna preclusione processuale può essere rinvenuta nel fatto che una certa definizione di un punto in un precedente provvedimento (il cui gravame sia stato disatteso) venga poi ripreso analogamente in un successivo analogo, ma ontologicamente, separato atto.

Non appare dunque ostativa all'esame del gravame la mancata impugnativa delle precedenti ordinanze ministeriali, dato

che non vi è alcun vincolo di presupposizione necessaria tra le diverse ordinanze.

2.3. Per il medesimo ordine di ragioni di cui sopra devono essere disattese le eccezioni del Sindacato Nazionale autonomo degli Insegnanti di Religione che lamentano che l'accoglimento del ricorso risulterebbe gravemente lesivo della funzione e della dignità professionale degli insegnanti di religione cattolica relativamente alla asserita mancata impugnativa delle precedenti ordinanze ministeriali.

In coerenza con quanto sopra esposto è infatti evidente come – se il vulnus qui lamentato attiene ai diritti personalissimi - - il ricorso non è diventato inammissibile né è sopravvenuta la carenza di interesse dei due alunni ricorrenti per la mancata successiva impugnativa da parte loro delle operazioni di scrutinio con i crediti attribuiti con la partecipazione degli insegnanti di religione delle discipline alternative.

Anche tale eccezione va disattesa.

3. Nel merito, nell'ordine logico delle questioni deve essere innanzitutto esaminato il terzo motivo.

3.1. Con tale mezzo si lamenta, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge n. 121 del 1985; dell'articolo unico del d.p.r. 202 del 1990; e dell'articolo 309 del decreto legislativo 297/1994 laddove interpretate nel senso del provvedimento impugnato per violazione degli articoli 3,2,7,8 e 21 della Costituzione per l'evidente irragionevolezza e per le possibili discriminazione e disparità di trattamento che ne deriverebbero; per l'inaccettabile compressione del principio di parità fra confessioni religiose, nonché della libertà religiosa e del diritto di manifestazione del pensiero.

Ad avviso delle parti ricorrenti, si impedirebbe la garanzia che la scelta per l'una o per l'altra soluzione fosse dettata solo da considerazioni personali dell'interessato in assenza di qualsiasi condizionamento o discriminazione, in violazione dei principi dettati dalla Corte Cost. che aveva configurato anche la situazione

di "non obbligo" per coloro che non esercitano nessuna delle tre scelte proposte "non essendo alternativi e equivalenti l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio della libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona".

Posto dunque che, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, il giudice remittente deve privilegiare l'interpretazione della disposizione conforme a Costituzione e non può proporre questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche (cfr *infra* multa Corte Costituzionale, 18 marzo 2005, n. 112), è così evidente come ad un convincimento circa la rilevanza e la manifesta fondatezza dell'eccezione potrebbe eventualmente pervenirsi solo nel caso in cui si ritenesse di dover aderire al convincimento del giudice d'appello circa la legittimità – e quindi la conformità alle norme di legge richiamate -- delle ordinanze impugnate con i presenti ricorsi.

Nel caso in esame, la prospettata eccezione di incostituzionalità non appare strettamente pregiudiziale al fine della richiesta di valutazione circa l'illegittimità degli atti impugnati. Contrariamente a quanto vorrebbero, sia pure in via subordinata, le parti ricorrenti – e come sarà meglio chiarito in seguito – è l'interpretazione delle norme data dall'Amministrazione che ha portato all'adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini di esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all'insegnamento della religione cattolica.

Di qui la non manifesta rilevanza, allo stato, della questione.

4. Per ragioni di economia espositiva possono essere esaminati unitariamente-- attesa la loro assoluta specularità ed

assorbienza -- i seguenti profili di gravame relativi alla prima ed alla seconda censura di entrambi i ricorsi.

4.1. Con il primo motivo si deduce che il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con la lettera c) dell'articolo 9 della legge 121 del 1985[1], recante applicazione del concordato nel 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, per cui la scelta degli studenti o dei loro genitori di avvalersi, o meno, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non può "dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Il protocollo addizionale agli accordi del 1984 che fu formalizzato con il d.p.r. 202 del 1990, prevedeva che gli insegnanti di religione cattolica non avrebbero potuto disporre, né di voti, né svolgere esami, ma semplicemente stilare, "in luogo" di voti ed esami, una "nota speciale", nella quale dar conto dell'interesse con il quale ciascuno studente aveva seguito l'insegnamento ed il profitto ottenuto.

Ad avviso delle parti ricorrenti, l'articolo 205, comma uno, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, che attribuisce al ministero della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini di esami, avrebbe dovuto essere interpretato alla luce dei principi complessivamente risultanti dal medesimo decreto legislativo ed in particolare dal disposto dell'articolo 309 in base al quale, tra l'altro, i docenti dell'insegnamento della religione cattolica:

-- fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (terzo comma);

-- stilano "una speciale nota, da consegnare unitariamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento di profitto che ne ritrae". L'insegnante di religione ha certamente pari dignità rispetto agli

altri docenti, ma partecipa a medesimo titolo degli altri, alla determinazione complessiva della valutazione degli studenti, solo ed esclusivamente nel caso in cui il suo parere sia necessario (e quindi determinante) per la decisione circa la promozione o la bocciatura dello studente.

Per le parti ricorrenti se la disciplina legislativa e la costante prassi amministrativa stabiliscono che l'insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione bensì sulla speciale nota in luogo dei voti, allora è evidente che le disposizioni qui impugnate nel prevedere che gli insegnanti di religione cattolica "partecipino a pieno titolo" alla decisione sul credito scolastico, si pongono in evidente palmare contrasto con le fonti appena richiamate.

Le parti ricorrenti, richiamando le argomentazioni poste a base di un'interrogazione scritta di alcuni senatori, lamentano ancora che l'ordinanza impugnata: -- non trova giustificazione in alcuna innovazione legislativa o regolamentare, e si porrebbe in contrasto con l'orientamento costante della Corte Costituzionale (sentenze nn. 203/1989 e 13/1991);

-- ha l'effetto di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza, garantite dalla Carta Costituzionale e dall'articolo 9 del Concordato, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico.

4.2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta, sotto due profili di censura, l'eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di ragionevolezza. del principio di certezza giuridica del principio dell'affidamento e del divieto di retroattività degli atti amministrativi.

2.1. In una prima prospettazione si lamenta che l'ordinanza, in palese contraddizione con le precedenti analoghe ordinanze ministeriali, nel prescrivere un diverso criterio di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico, rispettivamente, agli studenti che si siano avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica o di un'attività alternativa, discriminerebbe gli studenti che, nell'esercizio del diritto fondamentale riconosciuto dalla sentenza

13/1991, abbiano scelto di assentarsi dall'edificio scolastico o comunque di astenersi da ogni insegnamento alternativo durante l'ora di religione cattolica.

E ciò perché, ai sensi dell'articolo tre, comma sei, legge 425/1997[2] "a conclusione dell'Esame di Stato viene assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte ed al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti".

In conseguenza, chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica sarebbe esposto al rischio di presentarsi in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro o in occasione della partecipazione a selezione per l'ammissione ai corsi universitari o borse di studio connotati come noto da un'altissima competitività.

Tale situazione non sarebbe comunque rimediata dalla possibilità degli studenti "non avvalentisi" di ottenere, in luogo del "credito scolastico", la valutazione dell'attività eventualmente svolta fuori dalla scuola quale i "crediti formativi" di cui al D.M. 49 del 24 febbraio 2000.

5. Entrambi gli assunti appaiono, ad avviso del Collegio, fondati nei sensi e nei limiti che seguono.

In linea generale, il concetto di separazione tra la sfera religiosa e quella civile è stato uno dei preziosi contributi della Cristianità alla civiltà occidentale.

Oggi il principio della laicità dello Stato, pur non definito in alcuna norma, è stato chiaramente enunciato dalla Corte costituzionale nell'ampia accezione di "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale", e rispetto al quale lo Stato si pone in condizione di "neutralità" (cfr. sent. 12 aprile 1989, n. 203). I

principi della Carta costituzionale postulano dunque uno Stato che, rispetto alla religione, non si pone in termini di ostilità, "ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (così n. 203 cit.).

Nello specifico del problema proprio nella ricordata pronuncia, è stato poi affermato che l'insegnamento della religione cattolica concerne un diritto di libertà costituzionale "non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche".

Sulla considerazione che la religione non è una "materia scolastica" come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l'illegittimità della sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi.

E ciò, non perché la religione cattolica non debba essere considerata una materia priva di valori storici e culturali ma anzi, al contrario, perché non può essere considerata una normale disciplina scolastica proprio perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l'intimo profondo della persona che vi aderisce.

Al riguardo è stato autorevolmente sottolineato che, nelle società contemporanee, senza i valori religiosi anche molti non credenti perdono punti di riferimento.

La sfera religiosa concerne aspetti che coinvolgono la dignità (riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2 Cost.) dell'essere umano e spetta indifferentemente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (cfr. Corte costituzionale, 08 ottobre 1996, n. 334).

Ma proprio per questa ragione, sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa.

Sotto tale profilo è dunque evidente l'irragionevolezza dell'Ordinanza che, nel consentire l'attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito.

Tal circostanza, del resto, concerne anche gli stessi alunni che hanno aderito all'insegnamento della religione con un consapevole convincimento, ma il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede.

Infatti, lo Stato, dopo avere sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante" -- e quindi un'indiscriminata tutela ed un'evidentissima netta pozziorità -- violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno (Corte europea dir. uomo, 25 maggio 1993, n. 260). In una società democratica, al cui interno convivono differenti credenze religiose, certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali.

Nel caso non può essere infatti dimenticato che, ai sensi dell'art. 3, comma sei, della L. 425/1997, il credito scolastico, che può arrivare fino ad massimo di punti 25, pesa per oltre il 55,55 % dei 45 punti assegnati per le prove scritte ed è pari all'83,33 % dei 30 punti assegnati per la valutazione del colloquio.

Una così radicale svalutazione del valore complessivo delle prove scritte ed orali rispetto al valore del voto finale ben può giustificare le preoccupazione di chi non abbraccia tale culto, circa la rilevanza e l'incidenza dei crediti in questione sull'esito dell'esame.

Al riguardo non può ignorarsi il fatto che, per comune esperienza di vita, nelle nostre scuole (metropolitane e non) le c.d. materie alternative -- concernendo comunque una minoranza della popolazione scolastica -- spesso o non vengono attivate affatto per mancanza di risorse ovvero nella realtà delle cose si riducono al semplice "parcheggio" degli alunni in qualche aula.

E ciò anche quando gli alunni delle più eterogenee etnie del mondo e delle altre più disparate confessioni rappresentano quasi il 40% degli studenti (con punte addirittura del 90 % in alcune estreme periferie dei grandi agglomerati urbani).

Né, come esattamente ricordato con il primo profilo del secondo motivo, tale discriminazione viene meno per la possibilità degli studenti "non avvalentisi" di ottenere la valutazione delle attività eventualmente svolte fuori dalla scuola quale "crediti formativi" di cui al D.M. 49 del 24 febbraio 2000. Infatti, mentre ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 323/1998, il "credito scolastico" costituisce la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso con riguardo al profitto e all'assiduità della frequenza scolastica; i "crediti formativi" debitamente documentati esprimono generiche esperienze, da cui possano derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato (cfr. Consiglio di Stato 22 giugno 2005 n. 3290).

Il che in concreto comporta che le famiglie laiche o degli alunni stranieri appartenenti ad altre confessioni siano di fatto costretti o, ad accettare cinicamente e subdolamente l'insegnamento di una religione cui non credono; ovvero a subire un'ulteriore discriminazione di carattere religioso, che si accompagna e si aggiunge spesso a quelle di carattere razziale, economico, linguistico e culturale.

Il sistema complessivo, in essere in concreto, ha dunque l'effetto di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza, garantita dalla Carta Costituzionale e dell'articolo 9 del Concordato, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico.

In coerenza con i valori fondanti della C.e.d.u., in una società al cui interno convivono differenti credenze religiose, è necessario conciliare gli interessi dei diversi gruppi e garantire il rispetto delle convinzioni di ciascuno (arg. ex Corte europea dir. uomo, 31 luglio 2001), e non può manifestarsi una preferenza per una particolare confessione o fede religiosa, ma deve garantirsi il ruolo imparziale dello Stato (cfr. Corte europea dir. uomo, 10 novembre 2005).

In tale ottica non pare che le ordinanze qui impugnate rispettino il principio di imparzialità e di par condicio tra le confessioni religiose che è alla base della neutralizzazione dei contrasti tra le diverse confessioni nelle democrazie occidentali contemporanee.

Le ordinanze impugnate si pongono dunque in radicale contrasto con la lettera c) dell'articolo 9 della legge 121 del 1985, in quanto l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni (islamica, ebraica, cristiana, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica (come del resto avviene in Germania).

6. In tali esclusivi assorbenti profili entrambi i ricorsi sono dunque fondati e devono essere accolti.

Per l'effetto deve essere dichiarato l'annullamento delle ordinanze di cui in epigrafe.

Le spese, in ragione della natura controversa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III-quater :

1. riunisce gli epigrafati ricorsi ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907 n. 642,;

2. Accoglie entrambi i ricorsi e per l'effetto annulla i provvedimenti meglio specificati in epigrafe.

3. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III-quater, in Roma, nelle Camere di Consiglio dell'11 febbraio 2009 e del 6 maggio 2009.

ANEXO II.

ASUNTO LAUTSI C. ITALIA (*DEMANDA N^o 30814/06*). ESTRASBURGO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2009¹¹

En el asunto Lautsi c. Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), reunido en una sala compuesta por:

Françoise Tulkens, *Presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, *jueces*,

y Sally Dollé, *Secretaria de sección*.

Tras haber deliberado el 13 de octubre de 2009, adoptó esta decisión en el día de la fecha.

¹¹ Traducción de Ascensión Viu Moreno y Magali Montel.

PROCESO

1.- En el origen del pleito se encuentra una demanda (Nº. 30814/06) dirigida contra la República italiana y en la cual una residente de este Estado, la señora Soile Lautsi (“la demandante”), llevó ante el Tribunal el 27 de julio de 2006 en virtud del artículo 34 del *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales* (“el Convenio”). Ella actúa en su nombre así como en el de sus hijos, Dataico y Sami Albertin.

2.- La demandante está representada por el señor N. Paoletti, abogado en Roma. El Gobierno italiano (“el Gobierno”) está representado por su agente, la señora E. Spatafora y por su ayudante, M. N. Lettieri.

3.- La demandante alegaba que la exposición de la cruz en las aulas de la escuela pública frecuentada por sus hijos era una injerencia incompatible con la libertad de convicción y de religión así como con el derecho a una educación y a una enseñanza conformes a sus convicciones religiosas y filosóficas.

4.- El 4 de julio de 2008, el Tribunal ha decidido comunicar la demanda al Gobierno. Haciendo prevalecer las disposiciones del artículo 29.3 del Convenio, ha decidido que serían examinados al mismo tiempo la admisión y la legitimidad del asunto.

5.- Tanto la demandante como el Gobierno han presentado por escrito sus observaciones sobre el fondo del asunto (artículo 59.1 del reglamento).

HECHOS

I.- LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA

6.- La demandante reside en Abano Terme y tiene dos hijos, Dataico y Sami Albertin. Estos últimos, de once y trece años respectivamente, frecuentaron en 2001-2002 la escuela pública "*Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltré*", en Abano Terme.

7.- Las aulas tenían todas un crucifijo, lo que la demandante estimaba contrario al principio de laicidad según el cual ella deseaba educar a sus hijos. Ella planteó esta cuestión en el transcurso de una reunión organizada el 22 de abril de 2002 por la escuela e hizo valer que, según el Tribunal de casación (sentencia N°. 4273 del 1 de marzo de 2000), la presencia de un crucifijo en las salas de votación preparadas para las elecciones había sido ya juzgado como contrario al principio de laicidad del Estado.

8.- El 27 de mayo de 2002, la dirección de la escuela decidió dejar los crucifijos en las aulas.

9.- El 23 de julio de 2002, la demandante impugnó esta decisión ante el TAR de Venecia. Apoyándose en los artículos 3 y 19 de la Constitución italiana y en el artículo 9 del Convenio, alegando la violación del principio de laicidad. Además, denunciaba la violación del principio de imparcialidad de la Administración pública (artículo 97 de la Constitución). De este modo, ella pedía al TAR que elevara a la Corte Constitucional cuestión de constitucionalidad.

10.- El 3 de octubre de 2007 (sic), el Ministerio de Instrucción Pública adopta la Directiva N°. 2666¹² que recomendaba a los directores de las escuelas exponer el crucifijo. Se constituyó en parte en el procedimiento, y sostuvo que la situación criticada se fundaba sobre el artículo 118 del Decreto Real N°. 1297 del 26 de abril de 1928 (disposiciones anteriores a la Constitución y a los Acuerdos entre Italia y la Santa Sede).

¹² La *Direttiva sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche* dictada por el *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*, es de fecha 3 de octubre de 2002.

11.- El 14 de febrero de 2004, el TAR de Venecia estimó, teniendo en cuenta el principio de laicidad (artículos 2, 3, 7, 8, 9, 19 y 20 de la Constitución) que la cuestión de Constitucionalidad no era manifiestamente mal fundada y decide trasladarla a la Corte Constitucional. Además, atendida la libertad de enseñanza y la obligación de asistir a la escuela, la presencia del crucifijo devenía imposición a los alumnos, a los padres de los alumnos y a los profesores y favorecía a la religión cristiana en detrimento de otras religiones. La demandante se constituyó en parte en el proceso ante la Corte Constitucional. El Gobierno sostuvo que la presencia del crucifijo en las aulas era un “hecho natural”, con el pretexto de que no era solamente un símbolo religioso sino también la “bandera de la Iglesia católica”, que era la única Iglesia nombrada en la Constitución (artículo 7). Era por tanto necesario considerar que el crucifijo era un símbolo del Estado italiano.

12.- Mediante resolución N°. 389, del 15 de diciembre de 2004, la Corte Constitucional se consideró incompetente dado que las disposiciones litigiosas no estaban incluidas en una ley sino en unos reglamentos, que no tenían fuerza de ley (apartado 26, *infra*).

13.- El proceso ante el TAR se retomó. Mediante decisión N°. 1110, de 17 de marzo de 2005, el TAR rechazó el recurso de la demandante. Estimó que el crucifijo era a la vez el símbolo de la historia y de la cultura italianas, y por consiguiente de la identidad italiana, y el símbolo de los principios de igualdad, de libertad y de tolerancia así como de la laicidad del Estado.

14.- La demandante presentó un recurso ante el Consejo de Estado.

15.- Por una sentencia del 13 de febrero de 2006, el Consejo de Estado desestimó el recurso, con fundamento en que la cruz había llegado a ser uno de los valores laicos de la Constitución italiana y representaba los valores de la vida civil.

II.- EL DERECHO Y LA PRÁCTICA INTERNAS PERTINENTES

16.- La obligación de exponer el crucifijo en las aulas se remonta a una época anterior a la Unificación de Italia. En efecto, en los términos del artículo 140 del Decreto Real N.º. 4336, de 15 de septiembre de 1860, del Reino de Piamonte-Cerdeña, “*cada escuela deberá estar provista sin falta (...) de un crucifijo*”.

17.- En 1861, año del nacimiento del Estado italiano, el *Estatuto del Reino de Piamonte-Cerdeña* de 1848 se convirtió en *Estatuto italiano*. En el mismo se exponía que “*la religión católica apostólica y romana [era] la única religión del Estado. Los otros cultos existentes [eran] tolerados en conformidad con la ley*”.

18.- La toma de Roma por la Armada italiana, el 20 de septiembre de 1870, tras la cual Roma fue anexionada y proclamada capital del nuevo Reino de Italia, provocó una crisis de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Por la Ley N.º. 214, de 13 de mayo de 1871, el Estado italiano reglamentó unilateralmente las relaciones con la Iglesia y acordó con el Papa un cierto número de privilegios para el desarrollo regular de la actividad religiosa.

19.- Con el advenimiento del fascismo, el Estado adoptó una serie de circulares con el fin de hacer respetar la obligación de exponer el crucifijo en las aulas.

La Circular del Ministerio de Instrucción Pública N.º. 68, de 22 de noviembre de 1922, decía: “*Estos últimos años, en muchas escuelas primarias del Reino la imagen del Cristo y el retrato del Rey han sido retirados. Esto constituye una violación manifiesta y no tolerable de una disposición reglamentaria y, sobre todo, un ataque a la religión dominante del Estado así como a la unidad de la Nación. Nosotros notificamos pues a todas las administraciones municipales del Reino la orden de restablecer, en las escuelas que se han visto desprovistas de ellos, los dos símbolos sagrados de la fe y del sentimiento nacional.*”

La Circular del Ministerio de Instrucción Pública N°. 2134-1867, de 26 de mayo de 1926, afirmaba: *“El símbolo de nuestra religión, sagrado para la fe así como para el sentimiento nacional, exhorta e inspira a la juventud estudiosa, que en las universidades y otros establecimientos de enseñanza superior estimula su espíritu y su inteligencia en vista de las altas misiones a las que está llamada”*.

20.- El artículo 118 del Decreto Real N°. 965, de 30 de abril de 1928 (Reglamento interior de los establecimientos escolares secundarios del Reino), obtuvo la siguiente redacción: *“Cada establecimiento escolar debe tener la bandera nacional, cada aula la imagen del crucifijo y el retrato del Rey”*.

El artículo 119 del Decreto Real N°. 1297, de 26 de abril de 1928 (por el que se aprueba el Reglamento General de los servicios de enseñanza primaria), incluye el crucifijo entre los *“equipamientos y materiales necesarios en las aulas de las escuelas”*.

Los órganos jurisdicciones nacionales han considerado que estas dos disposiciones permanecían actualmente en vigor y eran aplicables al caso.

21.- Los Pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929, marcaron la “Conciliación” del Estado italiano y la Iglesia católica. El catolicismo fue confirmado como la religión oficial del Estado italiano. El artículo 1 del Tratado obtuvo la siguiente redacción: *“Italia reconoce y reafirma el principio consagrado por el artículo 1 del Estatuto Albertino del Reino del 4 de marzo de 1848, según el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado.”*

22.- En 1948, el Estado adoptó su Constitución republicana.

El artículo 7 de ésta reconoce explícitamente que el Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su orden, independientes y soberanos. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica son reglamentadas por los Pactos de Letrán y las modificaciones de

éstos aceptadas por las dos partes no exigiendo proceso de revisión constitucional.

El artículo 8 expresa que las confesiones religiosas distintas que la católica *“tienen el derecho de organizarse según sus propios estatutos, mientras que no se opongan al orden jurídico italiano”*. Las relaciones entre el Estado y estas otras confesiones *“son fijadas por la ley sobre la base de acuerdos entre sus representantes respectivos”*.

23.- La religión católica cambió de estatuto después de la ratificación, por Ley N°. 121, de 25 de marzo de 1985, de la primera disposición del Protocolo Adicional al nuevo Concordato con el Vaticano de 18 de febrero de 1984, modificando los Pactos de Letrán de 1929. Según esta disposición, el principio, proclamado en el origen por los Pactos de Letrán de la religión católica como la única religión del Estado, ya no se considera vigente.

24.- La Corte Constitucional italiana en su Sentencia N°. 508, de 20 de noviembre de 2000, ha resumido su jurisprudencia afirmando que los principios fundamentales de igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de religión (artículo 3 de la Constitución) y de igual libertad de todas las religiones ante la ley (artículo 8) tiene como consecuencia que la actitud del Estado deba estar marcada por la equidistancia y la imparcialidad, sin conceder importancia al número de miembros de una religión o de otra (ver Sentencias N°. 925/88; 440/95; 329/97) o a la amplitud de las reacciones sociales en la violación de los derechos de la una o de la otra (ver Sentencia número 329/97). La igual protección de la conciencia de cada persona que se adhiere a una religión es independiente de la religión elegida (ver Sentencia número 440/95), lo que no está en contradicción con la posibilidad de una diferente regulación entre el Estado y las diferentes religiones en el sentido de los artículos 7 y 8 de la Constitución. Tal posición de equidistancia y de imparcialidad es el reflejo del principio de laicidad que la Corte Constitucional ha encontrado en las normas de la Constitución, que tiene naturaleza

de “principio supremo” (ver sentencia N°. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97) y que caracteriza al Estado en tanto que pluralista. Las creencias, culturas y tradiciones diferentes deben vivir juntas en la igualdad y la libertad (ver Sentencia N°. 440/95).

25.- En su Sentencia N°. 203, de 1989, la Corte Constitucional ha examinado la cuestión del carácter no obligatorio de la religión católica en las escuelas públicas. En esta ocasión, ha afirmado que la Constitución contenía el principio de laicidad (artículos 2, 3, 7, 8, 9, 19, y 20) y que el carácter confesional del Estado había sido explícitamente abandonado en 1985, en virtud del Protocolo Adicional a los nuevos Acuerdos con la Santa Sede.

26.- La Corte Constitucional, llamada a pronunciarse sobre la obligación de exponer el crucifijo en las escuelas públicas, ha vuelto sobre la Ordenanza N°. 389, del 15 de diciembre del 2004 (apartado 12, anteriormente mencionado). Sin tomar una decisión sobre el fondo, ha declarado manifiestamente inadmisibles las Cuestiones planteadas porque tenían por objeto disposiciones reglamentarias, desprovistas de fuerza de ley, que por consiguiente escapaban a su jurisdicción.

EN DERECHO

I.- SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 2 DEL PROTOCOLO N° 1 EXAMINADO CONJUNTAMENTE CON EL ARTÍCULO 9 DEL CONVENIO.

27.- La demandante alega en su nombre y en el de sus hijos que la exposición de la cruz en la escuela pública frecuentada por éstos ha constituido una ingerencia incompatible con su derecho a asegurarles una educación y una enseñanza conformes a sus convicciones religiosas y filosóficas en el sentido del artículo 2 del Protocolo N°. 1, disposición que viene redactada como sigue:

“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”

Por otro lado, la demandante alega que la exposición de la cruz ha despreciado igualmente su libertad de convicción y de religión protegida por el artículo 9 del Convenio, que estipula:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.”

28.- El Gobierno contesta esta tesis.

A. Sobre la admisibilidad.

29.- El Tribunal constata que las quejas formuladas por la demandante no están manifiestamente mal fundadas en el sentido del artículo 35.3 del Convenio. El Tribunal subraya además que no chocan con ningún otro motivo de inadmisibilidad. Corresponde por tanto declararlas admisibles.

B. Sobre el fondo.

1. *Argumentos de las partes.*

a) La demandante

30. La demandante ha proporcionado los precedentes de las disposiciones pertinentes. Ella observa que la exposición del crucifijo se basa, según las jurisdicciones nacionales, en unas disposiciones de 1924 y 1928 que son consideradas todavía en vigor, a pesar de ser anteriores a la Constitución así como a los Acuerdos de 1984 con la Santa Sede y a su Protocolo Adicional. Según esto, las disposiciones litigiosas han escapado al control de constitucionalidad, puesto que la Corte Constitucional no habría podido pronunciarse sobre su compatibilidad con los principios fundamentales del orden jurídico italiano en razón de su naturaleza reglamentaria.

Las disposiciones en litigio son la herencia de una concepción confesional del Estado que choca hoy con el deber de laicidad de éste y desprecia los derechos protegidos por la Convención. Existe una “cuestión religiosa” en Italia, puesto que, obligando a exponer el crucifijo en las aulas, el Estado otorga a la religión católica una posición privilegiada que se traduciría en una injerencia del Estado en el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la demandante y de sus hijos y en el derecho de la demandante a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, así como en una modalidad de discriminación hacia los no católicos.

31. Según la demandante, el crucifijo tiene en realidad, sobre todo y ante todo, una connotación religiosa. El hecho de que la cruz tenga otras interpretaciones no lleva consigo la pérdida de su principal connotación, que es religiosa.

Privilegiar una religión por la exposición de un símbolo, da la sensación a los alumnos de las escuelas públicas –y especialmente a los hijos de la demandante– de que el Estado se adhiere a una creencia religiosa determinada. Y ello cuando, en

un Estado de Derecho, nadie debería percibir que el Estado está más cerca de una confesión religiosa que de otra, y sobre todo para las personas que son más vulnerables en razón de su corta edad.

32. Para la demandante, esta situación tiene entre otras repercusiones una presión indiscutible sobre los menores y da la sensación de que el Estado está alejado de los que no se reconocen en esta confesión. La noción de laicidad significa que el Estado debe ser neutro y dar prueba de equidistancia frente a las religiones, sin dar lugar a la percepción de que está más próximo a algunos ciudadanos que a otros.

El Estado debería garantizar a todos los ciudadanos la libertad de conciencia, comenzando por una instrucción pública apta para forjar la autonomía y la libertad de pensamiento de la persona, dentro del respeto de los derechos garantizados por el Convenio.

33. En cuanto al punto de si un docente sería libre de exponer otros símbolos religiosos en un aula, la respuesta sería negativa, vista la ausencia de disposiciones permitiéndolo.

b) El Gobierno

34. El Gobierno observa de entrada que la pregunta formulada en la presente demanda excede el marco propiamente jurídico para adentrarse en el terreno de la filosofía. Se trata, en efecto, de determinar si la presencia de un símbolo que tiene un origen y una significación religiosa es en sí una circunstancia susceptible de influir sobre las libertades individuales de una manera incompatible con el Convenio.

35. Si ciertamente la cruz es un símbolo religioso, reviste además otros significados. Tendría igualmente un significado ético comprensible y apreciable independientemente de la adhesión a la tradición religiosa o histórica por cuanto incorpora unos principios que pueden ser compartidos fuera de la fe

cristiana (no-violencia, igual dignidad de todos los seres humanos, justicia y reparto, primacía del individuo sobre el grupo e importancia de su libertad de elección, separación de lo político y lo religioso, amor al prójimo que va hasta perdonar a los enemigos). Ciertamente es que los valores en los que se basan hoy en día las sociedades democráticas tienen también su origen inmediato en el pensamiento de autores no-creyentes, incluso opuestos al cristianismo. Sin embargo, el pensamiento de estos autores se nutriría de esta filosofía cristiana aunque sólo sea por su educación y el ambiente cultural en el que se habrían formado y viven. En conclusión, los valores democráticos de hoy en día hundirían sus raíces en un pasado más lejano, el del mensaje evangélico. El mensaje de la cruz sería pues humanista, pudiendo leerse de manera independiente de su dimensión religiosa, constituido de un conjunto de principios y de valores que forman la base de nuestras democracias.

La cruz, remitiendo a este mensaje, sería perfectamente compatible con la laicidad y accesible a los no-cristianos y los no-creyentes, que podrían aceptarla en la medida en que evocaría el origen lejano de esos principios y de esos valores. En conclusión, pudiendo ser percibido como desprovisto de significación religiosa, la exposición del símbolo de la cruz en un lugar público no constituiría en sí un atentado a los derechos y libertades garantizados por el Convenio.

36. Según el Gobierno, esta conclusión se vería confirmada por el análisis de la jurisprudencia del Tribunal que exige una ingerencia mucho más activa que la simple exposición de un símbolo para constatar un atentado a los derechos y las libertades. Así pues, es una ingerencia activa la que ha llevado la violación del artículo 2 del Protocolo N.º 1 en el proceso *Fogerø (Folgerø y otros c. Noruega)*, [GC], N.º. 15472/02, CEDH 2007 - VIII).

En este caso, no está en juego la libertad de adherirse o no a una religión, porque en Italia esta libertad está plenamente garantizada. Tampoco se trata de la libertad de practicar una religión o de no practicar ninguna; el crucifijo está en efecto

expuesto en las aulas pero de ninguna manera se les pide a los profesores o a los alumnos dirigirle una señal de saludo, de reverencia o de simple reconocimiento, aún menos que se reciten oraciones en clase. De hecho, ni siquiera se les pide que presten atención alguna al crucifijo.

Finalmente, la libertad de educar a los niños conforme a las convicciones de los padres no está en tela de juicio: la enseñanza en Italia es totalmente laica y pluralista, los programas escolares no contienen ninguna alusión a una religión en particular y la instrucción religiosa es facultativa.

37. Refiriéndose a la sentencia *Kjeldsen, Busk Madsen y Petersen*, (7 de diciembre de 1976, serie A Nº. 23), en la que el Tribunal no ha constatado violación alguna, el Gobierno sostiene que, cualquiera que sea la fuerza evocadora, una imagen no es comparable con el impacto de un comportamiento activo, cotidiano y prolongado en el tiempo tal como la enseñanza. Además, sería posible educar a sus hijos en una escuela privada o en casa mediante preceptores.

38. Las autoridades nacionales gozan de un amplio margen de apreciación para unas cuestiones tan complejas y delicadas, estrechamente ligadas a la cultura y la historia. La exposición de un símbolo religioso en unos lugares públicos no excedería el margen de apreciación dejado a los Estados.

39. Esto sería aún más veraz en tanto que en Europa existe una pluralidad de enfoques en la materia. A modo de ejemplo, en Grecia todas las ceremonias civiles y militares prevén la presencia y la participación activa de un ministro del culto ortodoxo; en otros, como Alsacia, el Viernes Santo, se proclama el luto nacional y todas las oficinas y comercios permanecerán cerrados.

40. Según el Gobierno, la exposición de la cruz no pone en entredicho la laicidad del Estado, principio que está inscrito en la Constitución y en los acuerdos con la Santa Sede. Tampoco sería el signo de una preferencia por una religión ya que recordaría una tradición cultural y unos valores humanistas compartidos por

otras personas además de los cristianos. En conclusión, la exposición de la cruz no ignoraría el deber de imparcialidad y de neutralidad del Estado.

41. Por lo demás, no hay consenso europeo sobre la manera de interpretar concretamente la noción de laicidad, por lo que los Estados tendrían un margen de apreciación aún más amplio en esta materia. Incluso, aunque existiera un consenso europeo sobre el principio de laicidad del Estado, no lo habría sobre sus implicaciones concretas y su aplicación. El Gobierno pide al Tribunal que muestre prudencia y reserva y que se abstenga por consiguiente de dar un contenido preciso que llegara hasta prohibir la simple exposición de símbolos. Si no, daría un contenido material predeterminado al principio de laicidad, lo que iría en contra de la legítima diversidad de los enfoques nacionales y conduciría a unas consecuencias imprevisibles.

42. El Gobierno no sostiene que sea necesario, oportuno o deseable mantener el crucifijo en las aulas, pero la elección de mantenerlo allí o no sería política y respondería por tanto a criterios de oportunidad, no de legalidad. De la evolución histórica del derecho interno esbozado por la interesada, que el Gobierno no discute, habría de extraerse que la República italiana, aunque laica, ha decidido libremente dejar los crucifijos en las aulas por diferentes motivos, entre los cuales se halla la necesidad de alcanzar un compromiso con los partidos de inspiración cristiana que representan a una parte esencial de la población y de sus sentimientos religiosos.

43. En cuanto a saber si un profesor sería libre de exponer otros símbolos religiosos en un aula, ninguna disposición lo prohibiría.

44. En conclusión, el Gobierno pide al Tribunal desestimar la petición.

c) La tercera parte

45. El Greek Helsinki Monitor (el “GHM”) cuestiona todas las tesis defendidas por el Gobierno.

La cruz, y más aún el crucifijo, sólo pueden ser percibidos como símbolos religiosos. El GHM discute también la afirmación según la cual hay que ver en la cruz otra cosa distinta del símbolo religioso y que la cruz es portadora de valores humanistas; piensa que semejante posición es ofensiva para la Iglesia. Además, el Gobierno italiano no habría indicado ni un solo no-cristiano que estaría de acuerdo con esta teoría. Por último, otras religiones sólo verían en la cruz un símbolo religioso.

46. Si se sigue el argumento del Gobierno según el cual la exposición del crucifijo no pide ni saludo, ni atención, cabría preguntarse entonces por qué el crucifijo viene expuesto. La exposición de tal símbolo podría ser percibida como la veneración institucional de éste.

A este respecto, el GHM observa que, según los Principios orientadores de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias en las escuelas públicas [elaborado por el *Consejo Asesor de Expertos* de la *Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (“OSCE”)*], la presencia de tal símbolo en una escuela pública puede constituir una forma de enseñanza implícita de una religión, por ejemplo dando la impresión de que esta religión particular se ve favorecida en relación a otras. Si el Tribunal, en el proceso *Folgerø*, afirmó que la participación en las actividades religiosas podía tener una influencia sobre unos niños, entonces, según el GHM, la exposición de símbolos religiosos también puede tenerla. También hay que pensar en situaciones en las que los niños o sus padres podrían temer represalias si decidieran protestar.

3. *Apresiasión del Tribunal*

d) Principios generales

47. En lo que se refiere a la interpretación del artículo 2 del Protocolo N.º 1, en el ejercicio de las funciones que el Estado asume en el campo de la educación y de la enseñanza, el Tribunal ha extraído en su jurisprudencia los principios recordados a continuación que son pertinentes para este proceso (véase, en particular, *Kjeldsen, Busk Madsen y Petersen c. Dinamarca*, fallo del 7 de diciembre de 1976, serie A N.º 23, pp. 24-28, §§ 50-54, *Campbell y Cosans c. Reino Unido*, fallo del 25 de febrero de 1982, serie A N.º 48, pp. 16-18, §§ 36-37, *Valsamis c. Grecia*, fallo del 18 de diciembre de 1996, *Selección de los fallos y decisiones* 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, y *Fogerø y otros c. Noruega* [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).

(a) Hay que leer los dos incisos del artículo 2 del Protocolo N.º 1 respecto no sólo el uno de la otro sino, también y especialmente, de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio.

(b) Es al derecho fundamental a la instrucción al que se añade el derecho de los padres con respecto a sus convicciones religiosas y filosóficas y la primera frase no distingue, como lo hace la segunda, entre la enseñanza pública y la enseñanza privada. La segunda frase del artículo 2 del Protocolo N.º 1, pretende salvaguardar la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial para la preservación de la “sociedad democrática” tal y como la concibe el Convenio. En razón del poder del Estado moderno, este objetivo debe realizarse sobre todo a través de la enseñanza pública.

(c) El respeto de las convicciones de los padres debe ser posible en el marco de una educación capaz de asegurar un ambiente escolar abierto y favorecedor de la inclusión frente a la exclusión, independientemente del origen social de los alumnos, de las creencias religiosas o del origen étnico. La escuela no debería ser el teatro de actividades misionarias o de predicación; debería ser el lugar de encuentros de diferentes religiones y convicciones filosóficas, donde los alumnos pueden adquirir conocimientos sobre sus pensamientos y tradiciones respectivas.

(d) La segunda frase del artículo 2 del Protocolo N.º 1 implica al Estado para que, cumpliendo unas funciones asumidas por él en materia de educación y de enseñanza, vele porque las informaciones o conocimientos incorporados a los programas sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista. Le prohíbe perseguir una meta de adoctrinamiento que pueda considerarse no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí está el límite que no se puede sobrepasar.

(e) El respeto de las convicciones religiosas de los padres y de las creencias de los niños implica la libertad de creer y la libertad de no creer (la libertad negativa), ambas protegidas por el artículo 9 del Convenio (véase, bajo la perspectiva del artículo 11, *Young, James y Webster c. Reino Unido*, 13 de agosto de 1981, §§ 52-57, serie A N.º. 44).

El deber de neutralidad y de imparcialidad del Estado es incompatible con cualquier poder de apreciación por parte de éste en cuanto a la legitimidad de las convicciones religiosas o de las modalidades de expresión de éstas. En el contexto de la enseñanza, la neutralidad debería garantizar el pluralismo (*Folgerø*, ya citado, § 84).

b) Aplicación de estos principios

48. Para el Tribunal, estas consideraciones conducen a la obligación por parte del Estado de abstenerse de imponer creencias, incluso indirectamente, en los lugares en los que las personas dependen de él o también en los lugares en los que son completamente vulnerables. La escolarización de los niños representa un sector particularmente sensible porque, en este caso, el poder apremiante del Estado se impone a unos espíritus que carecen todavía (según el nivel de madurez del niño) de la capacidad crítica que le permita mantener la distancia en relación

con el mensaje que se deriva de una elección preferencial manifestada por el Estado en materia religiosa.

49. Al aplicar los principios antes mencionados al presente proceso, el Tribunal debe examinar la cuestión de si el Estado defensor, al imponer la exposición del crucifijo en las aulas, ha velado en el ejercicio de sus funciones de educación y de enseñanza porque los conocimientos sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista y ha respetado las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, conforme al artículo 2 del Protocolo N°.1.

50. Para examinar esta cuestión, el Tribunal tomará en cuenta la naturaleza del símbolo religioso y su impacto sobre los alumnos más jóvenes, en particular los niños de la demandante. En efecto, en los países en los que la gran mayoría de la población se adhiere a una religión específica, la manifestación de los ritos y símbolos de esta religión, sin restricciones de lugar ni de forma, puede considerarse una presión sobre los alumnos que no practican dicha religión o sobre los que se adhieren a otra religión (*Karaduman c. Turquía*, decisión de la Comisión del 3 de mayo de 1993).

51. El Gobierno (apartados 34-44 anteriormente mencionados) justifica la obligación (o el hecho) de exponer el crucifijo refiriéndose al mensaje moral positivo de la fe cristiana, que trasciende los valores constitucionales laicos, al papel de la religión en la historia italiana así como al arraigo de ésta en la tradición del País. Atribuye al crucifijo una significación neutra y laica en referencia a la historia y a la tradición italiana, íntimamente ligadas al cristianismo. El Gobierno sostiene que el crucifijo es un símbolo religioso pero que puede también representar otros valores (véase TAR de Venecia, N°. 1110, de 17 de marzo de 2005, §16, apartado 13 arriba mencionado).

Según la opinión del Tribunal, el símbolo del crucifijo tiene una pluralidad de significados entre los cuales predomina el significado religioso.

52. El tribunal considera que la presencia del crucifijo en las aulas va más allá del uso de símbolos en unos contextos históricos específicos. De hecho ha estimado que el carácter tradicional, en el sentido social e histórico, de un texto utilizado por los parlamentarios para jurar, no privaba el juramento de su naturaleza religiosa (*Buscarini y otros c. San Marino* [GC], N.º. 24645/94, CEDH 1999-I)

53. La demandante alega que el símbolo choca con sus convicciones y viola el derecho de sus hijos a no profesar la religión católica. Sus convicciones alcanzan un grado de seriedad y coherencia suficiente como para que la presencia obligatoria del crucifijo pueda ser razonablemente entendida por ella en conflicto con éstas. La interesada ve en la exposición del crucifijo la señal de que el Estado se pone del lado de la iglesia católica. Tal es el significado oficialmente reconocido por la Iglesia católica que atribuye al crucifijo un mensaje fundamental. En consecuencia, la aprensión de la demandante no es arbitraria.

54. Las convicciones de la Sra. Lautsi conciernen también el impacto de la exposición del crucifijo sobre sus hijos (apartado 32 antes mencionado), con una edad en aquella época de once y trece años. El Tribunal reconoce que, como está expuesto, es imposible no notar el crucifijo en las aulas. En el contexto de la educación pública, se percibe necesariamente como parte íntegra del medio escolar y puede por consiguiente ser considerado como una “señal exterior fuerte” (*Dahlab c. Suiza* (dic.), N.º. 42393/98, CDEH 2001-V).

55. La presencia del crucifijo puede fácilmente ser interpretada por unos alumnos de cualquier edad como un signo religioso y se sentirán educados en un ambiente escolar marcado por una religión dada. Lo que puede animar a ciertos alumnos religiosos, puede perturbar emocionalmente a alumnos de otra religión o a los que no profesan religión alguna. Este riesgo está particularmente presente entre los alumnos que pertenecen a las minorías religiosas. La libertad negativa no se limita a la ausencia de servicios religiosos o de enseñanza religiosa. Se extiende a las

prácticas y a los símbolos que expresan, en particular o en general, una creencia, una religión o el ateísmo. Este derecho negativo merece una protección particular si el Estado es el que expresa una creencia y si la persona se enfrenta a una situación de la que no se puede liberar o sólo puede hacerlo mediante unos esfuerzos y un sacrificio desproporcionados.

56. La exposición de uno o varios símbolos religiosos no se puede justificar ni por la demanda de otros padres que deseen una educación religiosa conforme a sus convicciones ni, como el Gobierno sostiene, por la necesidad de un compromiso necesario con los partidos políticos de inspiración cristiana. El respeto de las convicciones de los padres en materia de educación debe tener en cuenta el respeto de las convicciones de los demás padres. El Estado tiene la obligación de asumir una neutralidad confesional en el marco de la educación pública donde la presencia en clase está prevista sin acepción de religión y debe buscarse inculcar a los alumnos un pensamiento crítico.

El Tribunal no ve cómo la exposición, en las aulas de las escuelas públicas, de un símbolo que razonablemente se puede asociar al catolicismo (la religión mayoritaria en Italia) podría servir al pluralismo educativo que es esencial para la preservación de una “sociedad democrática” tal y como se concibe en el Convenio. El Tribunal recuerda a este respecto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional camina en el mismo sentido (véase apartado 24).

57. El Tribunal estima que la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión determinada en el ejercicio de la función pública en relación con unas situaciones particulares que dependen del control gubernamental, en concreto, en las aulas escolares, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones así como el derecho de los niños escolarizados a creer o no creer. El Tribunal considera que esta medida conlleva la violación de estos derechos porque las restricciones son incompatibles con el deber que incumbe al

Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación.

58. Por lo tanto, ha existido violación del artículo 2 del Protocolo N°. 1 conjuntamente con el artículo 9 del Convenio.

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 14 DEL CONVENIO

59. La demandante sostiene que la ingerencia que ella ha denunciado, bajo la perspectiva del artículo 9 del Convenio y del artículo 2 del Protocolo N°. 1, ignora igualmente el principio de no-discriminación, consagrado por el artículo 14 del Convenio.

60. El Gobierno combate esta tesis.

61. El Tribunal constata que este agravio no está manifiestamente mal fundado en el sentido del artículo 35 § 3 del Convenio. Advierte, por otra parte, que no choca con ningún otro motivo de admisibilidad. Conviene pues declararlo admisible.

62. Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias del presente proceso y del razonamiento que lo ha conducido a constatar una violación del artículo 2 del Protocolo N°.1 combinado con el artículo 9 del Convenio (apartado 58 antes mencionado), el Tribunal estima que no ha lugar a examinar el proceso además bajo la perspectiva del artículo 14, tomado aisladamente o combinado con las disposiciones antes mencionadas.

III. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO

63. Según los términos del artículo 41 del Convenio,

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el Derecho interno de la Alta

Parte Cotratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”

A. Daños

64. La demandante solicita el pago de una cantidad de al menos 10 000 € por perjuicio moral.

65. El Gobierno estima que una constatación de violación sería suficiente. Subsidiariamente, considera que la cantidad reclamada es excesiva y no justificada y pide su desestimación o su reducción equitativa.

66. Dado que el Gobierno no ha declarado estar dispuesto a revisar las disposiciones regulando la presencia del crucifijo en las aulas, el Tribunal estima que a diferencia de lo que pasó en el proceso *Folgerø* y otros (fallo ya citado, § 109), la constatación de la violación no bastaría en este caso. En consecuencia, resolviendo equitativamente, otorga 5 000 € a título de perjuicio moral.

B. Gastos y costas

67. La demandante pide 5000 € por gastos y costas gastados en el proceso en Estrasburgo.

68. El Gobierno observa que la demandante no ha justificado su demanda y sugiere el rechazo de ésta.

69. Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante sólo puede obtener el reembolso de sus gastos y costas en la medida en que se establecen su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su imposición. En este caso, la demandante no ha ofrecido ningún documento justificativo en apoyo a su demanda de reembolso. El Tribunal decide desestimarla.

C. Intereses de demora

70. El Tribunal juzga apropiado adoptar el tipo de interés del Banco Central Europeo aumentado en un porcentaje de tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL UNANIMEMENTE,

1.- Declara la demanda admisible;

2. Declara que hubo violación del artículo 2 del Protocolo N°.1 examinado juntamente con el artículo 9 del Convenio;

3. Declara que no ha lugar al examen de la vulneración del artículo 14 tomado aisladamente o en combinación con el artículo 9 del Convenio y el artículo 2 del Protocolo N°.1;

4. Declara

a) que el Estado debe pagar a la demandante, en un plazo de tres meses a partir del día en que el fallo se haga definitivo conforme con el artículo 44 § 2 del Convenio, 5000 € (cinco mil euros), por daño moral, más cualquier otro montante que proceda a título de impuesto

b) que a partir de la expiración de dicho plazo y hasta el pago, esta suma se incrementará con el interés simple de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante ese período, aumentado en el porcentaje de tres puntos.

5. Desestima en lo restante la demanda de satisfacción equitativa.

Hecho en francés y luego comunicado por escrito el 3 de noviembre de 2009, en aplicación del artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento.

**ANEXO III.
NOTAS DEL GARANTE PROTEZIONE DATI
PERSONALI**

**1.- NOTA GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI
DE FECHA 5/6/09.**

In riferimento alle foto pubblicate oggi dal quotidiano spagnolo "El Pais", e riportate da alcuni quotidiani italiani e da molti siti web, il Garante per la protezione dei dati personali ritiene doveroso richiamare alcuni dei principi che regolano il corretto trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

L'Autorità ribadisce che è illecito riprendere e comunque utilizzare immagini di persone all'interno di una privata dimora senza il loro consenso e con l'uso di tecniche particolarmente invasive.

Allo stato dei fatti, sembra che le foto pubblicate da "El Pais" non rispettino tali principi.

L'Autorità ricorda peraltro che, su segnalazione di parte, ha avviato nei giorni scorsi una istruttoria, ancora in corso, su una serie di foto, alcune delle quali ritraggono persone all'interno del parco di Villa Certosa, e che materiale fotografico relativo alla medesima vicenda è stato oggetto di sequestro ad opera della Procura di Roma.

Con riferimento alle immagini raccolte con le modalità e nel contesto sopra indicati, l'Autorità raccomanda, dunque, agli organi di informazione italiani il più attento rispetto della normativa sulla privacy e del codice deontologico dei giornalisti, e di attenersi ai principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e internazionale e dai precedenti interventi del Garante

**2.- NOTA GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI
DE FECHA 11/9/2009.**

Le foto che ritraggono l'On. Silvio Berlusconi sul pontile di accesso di Villa Certosa e quelle che ritraggono familiari su un pontile e su una spiaggia, pubblicate in agosto su alcune testate, non configurano, al contrario di quanto accaduto in altri casi, un illecito trattamento di dati personali.

L'Autorità ha osservato che i luoghi dove sono state riprese le immagini sono esposti, per loro natura, alla visibilità di terzi e in quanto tali, anche in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non possono considerarsi aree nelle quali possa vantarsi "una ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza".

L'Autorità ha dunque disposto l'archiviazione della segnalazione presentata a suo tempo.

